

Santiago, veintitrés de junio de dos mil veintidós.

**Vistos:**

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, en causa RUC N° 2000151271-5 y RIT N° 308-2021, por sentencia de cuatro de febrero de dos mil veintidós, condenó a ADRIANA DEL CARMEN AHUMADA AREVALO, como autora del delito de tráfico ilícito de drogas, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más multa y accesorias legales, y a la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, más accesorias legales, como autora del delito de tenencia ilegal de municiones, establecido en el artículo 9 en relación al artículo 2 letra c), ambos de la Ley de Control de Armas N° 17.798, ambos hechos ocurridos el día 11 de febrero de 2020, en la ciudad de Rancagua. El citado fallo igualmente condena a SOLANGE DOMINIQUE CATALÁN AHUMADA, como autora del delito de tráfico ilícito de drogas cometido el 11 de febrero de 2020 en la comuna de Rancagua, a la pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo, más multa y accesorias legales. También se condena a BRAYAN ALEXANDER CATALÁN AHUMADA, como autor del delito de tráfico ilícito de drogas, a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, más multas y accesorias legales y, además, a la pena única de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales, como autor de los delitos de porte ilegal de arma de fuego y porte de arma prohibida, castigados por la Ley N° 17.798, cometidos todos esos delitos el día 11 de febrero de 2020 en la comuna de Rancagua.

Las defensa de Adriana Ahumada Arévalo deduce recurso de nulidad por la causal de la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, y el apoderado de Solange y Brayan Catalán Ahumada interpone recurso de nulidad por las causales de las letras a) y b) del citado artículo 373, arbitrios que fueron admitidos



a tramitación, celebrándose la audiencia para su conocimiento el día 3 de los corrientes.

**Y considerando:**

1º) Que la causal de la letra a) de los recursos interpuestos en favor de Adriana Ahumada Arévalo y Solange y Brayan Catalán Ahumada, se fundan en la misma infracción, por lo que serán examinados y resueltos conjuntamente.

En dichos arbitrios se invoca lo preceptuado en los artículos 5, inciso 2º, 7, y 19 N°s. 2º, 4º y 5º, de la Constitución Política de la República, 5.1, 8.1, 11.1, 11.2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2.1, 2.2, 14.1, 17.1 y 17.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 5, 7, 9, 34, 36, 37, 38, 39, 44, 181, 205, 206, 212, 214 y 227 del Código del Código Procesal Penal.

Reclaman, en síntesis, porque la autorización otorgada por el juzgado de garantía en febrero de 2020 para el ingreso y registro a los domicilios de calle Cerrillo Tamaya N° 1434 y de Bolivia N° 2651 no se efectúa oportunamente, ni por el tribunal ni por el fiscal, siendo consignada por el primero sólo en mayo de 2021 con ocasión de la celebración de la audiencia de preparación del juicio oral, incumpliendo con ello además el tribunal el deber de fundamentación.

Se pide en ambos arbitrios la nulidad del juicio y la sentencia y la exclusión del nuevo juicio de la prueba derivada del referido ingreso.

2º) Que como se tuvo por cierto en el motivo 10º del fallo en estudio, la orden judicial fue realmente otorgada, señalando que “*de ello no existió duda*”, por lo que la protesta se centra en su falta de registro y de fundamentación.

En lo concerniente a la omisión por el tribunal que otorga la autorización de la constancia que dispone el artículo 9 del Código Procesal Penal, los recursos no han explicado de qué manera dicha omisión impidió el ejercicio del derecho de



defensa de los imputados, explicación que resulta inexcusable considerando que, como sienta el fallo en el referido considerando 10°, de la orden verbal “*se dejó registro en las actas de incautación, entrada y registro, por el propio jefe de la Sección OS7 de Carabineros, César Sánchez que estuvo a cargo del procedimiento, señalando que la orden les fue intimada a los afectados según el artículo 212 del Código del ramo, en el domicilio de Bolivia N° 2651, y por el Suboficial mayor José Díaz Tapia en el de calle Cerrillo Tamayo N°1434*”.

Es decir, la existencia de dicha orden constaba en la carpeta de investigación y, por ende, podía ser conocida por los letrados defensores de los imputados, y los mismos imputados la conocían desde que les fue intimada al ser ejecutada.

Entonces, si la existencia de esa orden era conocida desde el día de su ejecución por los imputados y sus defensas, y no obstante éstas no solicitan que se cumpla con tal constancia en el expediente electrónico del tribunal o en la carpeta de investigación del fiscal durante la etapa de investigación, sino que únicamente reclaman de la omisión de registro o constancia en la audiencia de preparación de juicio oral, salvo una explicación que los recursos no entregan, ello no puede sino llevar a concluir que tal omisión, no impidió durante la etapa de investigación el ejercicio del derecho de defensa.

**3°)** Que sin perjuicio de que esta Corte ha resuelto en sentencia Rol N° 19.693-16, de 19 de mayo de 2016, que respecto de las órdenes otorgadas de conformidad al inciso 3° del artículo 9 del Código Procesal Penal, no es exigible que la constancia que de su otorgamiento debe dejar el juez, contenga los fundamentos de hecho y de derecho de la resolución que dispuso la autorización u orden judicial, lo relevante aquí es que los fundamentos que se echan de menos están contenidos en los informes policiales que contienen las diligencias que



antecedieron a la solicitud de autorización de entrada y registro, por lo que los mismos pudieron ser conocidos y, en su caso, habrían permitido controvertir la legalidad del otorgamiento de dicha orden, cuestionamiento que tampoco aparece que se haya formulado, lo que, de nuevo, viene a ratificar que la omisión reprochada en nada afectó el derecho de defensa de los imputados en la etapa de investigación.

**4°)** Que, en definitiva, no ha sido controvertido que el juzgado de garantía de Rancagua incumplió una norma legal al no dejar oportunamente la constancia que ordena el artículo 9 del Código Procesal Penal, sin embargo, eso está lejos de colmar las elevadas exigencias de la causal de nulidad esgrimida, la que demanda una infracción “sustancial” a una “garantía fundamental”, características de las que, por las razones antes desarrolladas, carece el descuido judicial asentado.

**5°)** Que subsidiariamente, en favor de Solange Catalán Ahumada, se invoca también la causal de la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, por errónea aplicación de los artículos 11 N°s. 6 y 9 y 68, inciso 3°, del Código Penal, por no dar lugar a la rebaja de grado que correspondía atendido el concurso de dos minorantes.

Esta alegación debe ser desestimada, pues la uniforme y constante jurisprudencia de esta Corte ha señalado que la rebaja dispuesta en el inciso 3°, del artículo 68 del Código Penal siempre es facultativa para el tribunal, de modo que si éste no ejerce esa facultad, entregando fundamentos razonables para no hacerlo, como ocurrió en este caso según se lee en el motivo 24°, esta Corte no puede revisar ni modificar tal determinación.

**6°)** Que por todas las consideraciones anteriores, los recursos de nulidad antes analizados no podrán prosperar.

Y visto, además, lo prevenido en los artículos 373, 377 y 384 del Código



Procesal Penal, **se rechazan** los recursos de nulidad formalizados por las defensas de ADRIANA DEL CARMEN AHUMADA AREVALO, SOLANGE DOMINIQUE y BRAYAN ALEXANDER CATALÁN AHUMADA, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, en causa RUC N° 2000151271-5 y RIT N° 308-2021, con fecha cuatro de febrero de dos mil veintidós, y contra el juicio que le precedió, los que, en definitiva, no son nulos.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Dahm.

Rol N° 5921-22



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintitrés de junio de dos mil veintidós.

En Santiago, a veintitrés de junio de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

